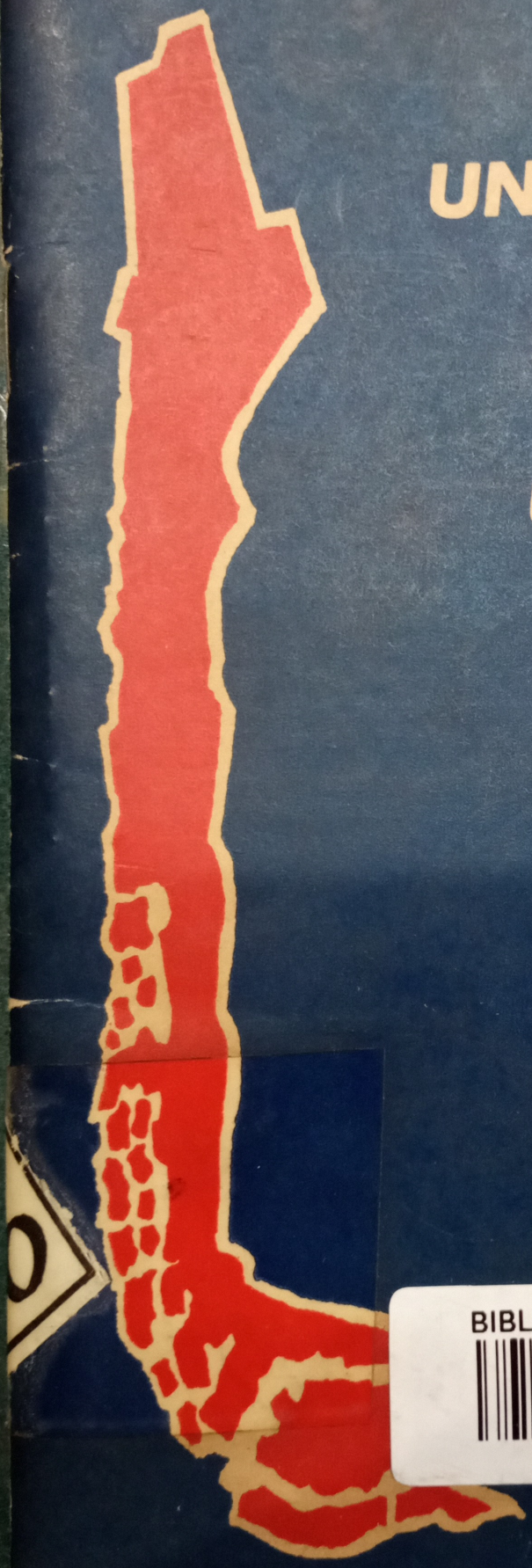
UN MOVIMIENTO
UNA POLITICA
UN GOBIERNO
PARA CHILE



BIBLIOTECA NACIONAL
0013901

LLO ROMO

Santiago, 30 de Enero de 1969.

Señor don

Mario Arnello Romo

Moneda 1160. Of. 803.

PRESENTE.—

Estimado amigo:

He leído con mucho interés y agrado, el estudio de que Ud. es autor, "Un Movimiento, una Política, un Gobierno para Chile", que tuvo la gentileza de hacerme llegar.

El pensamiento político que allí se sostiene, inspirado en su patriotismo, mira con altura la realidad y los problemas de Chile. La crítica que formula al sistema constitucional y partidista vigente, con el cual hombres como Ud. no están comprometidos, es profundamente certera. Al mismo tiempo, resulta enaltecedor el camino, limpio y generoso, que señala para rectificar la política chilena y establecer el espíritu y las normas concretas que permitan gobiernos eficaces, independientes, al servicio del país y de su pueblo.

El sentido nacional, por encima de partidismo e intereses de grupos; la autoridad, cuyo fundamento moral se basa en el respeto a la ley; la ley, norma general y no arbitrio para servir egoísmos, y el servicio a la colectividad, con criterio realista y no sometido a consignas ideológicas e internacionales, son, como Ud. indica, sólidos cimientos para reconstruir, con el esfuerzo de todos los chilenos, un Estado que cuente con la confianza del país entero.

Lo felicito, pues, por su trabajo, que merece una amplia divulgación.

Saluda muy atentamente a Ud., su afmo. S. S. y amigo,

10(M93-8pH)

JORGE ALESSANDRI R.

0018138

AAH3467

10 (1184-60)

Apuntes para un reportaje al Partido Nacional

Mario Arnello

BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE
Sección chileno
Clasificación 10 (1184-60)
Cutter —
Año Ed. 1968 Copia 2
Registro Seaco 29154
Registro Notis. AAH3467

29154

Revolución o Creación

Chile e Iberoamérica viven un período trascendente de su historia. Enfrentan graves presiones políticas, eclosiones sociales masivas, y profundas crisis y errores económicos. Y enfrentan también el embate de la acción desquiciadora de la estrategia marxista, las concesiones cómplices de los partidos políticos, la ceguera culpable de los grupos comprometidos con intereses foráneos y la desmoralizada pasividad de los sectores medios de las naciones del continente y de nuestra patria.

La tensión revolucionaria que vive Iberoamérica, tiene sus cauces en su complejidad cultural y racial, en su economía subordinada, en el bajo nivel de vida de las masas populares, en el desajuste entre el sistema político y de realidad social, entre el "país político" y el "país real".

En Iberoamérica está terminado el tiempo del formalismo democrático. Las grandes masas populares exigen participación mayor en el poder y en el bienestar, rechazan las estructuras que significaban el ejercicio democrático por minorías reducidas que se dicen representativas del pueblo anónimo y silencioso. Y exigen, pues, del Estado, no un formalismo ideológico, sino eficiencia; no un juego de partidos, sino resoluciones concretas a problemas reales; no verbalismo, sino realidades.

El pueblo, que está sometido a las presiones de la demagogia, a la siembra del odio, del resentimiento y a las mixtificaciones y al engaño, está tomando conciencia de su fuerza y de su miseria. No conoce cuál es el camino para realizar sus aspiraciones, pero quiere tomar alguno y no teme que ese camino sea el de una revolución.

En esta hora, los pueblos de América están siendo influenciados por las consignas sustentadas por el marxismo castrista o por los colectivistas disfrazados de comunitarios. Y como otra forma de enfrentar la revolución, de darle un cauce nacional, constructivo y unificador, aparece el anhelo de buscar soluciones a través de gobiernos fuertes, en la mayoría de los casos sin atención a formalismos inoperantes.

El peso de la decadencia

Chile no enfrenta con solidez el desafío de este tiempo. Una larga prédica desquiciadora ha desorientado a su pueblo y ha significado una decadencia de sus características originales. Se ha debilitado su sentido nacional y sus grupos políticos dirigentes conjugan todas las formas del internacionalismo sectario; se ha perdido el sentido de la autoridad, aún en quienes la ejercen; y ha carecido del genio que antes tuvo, para darse las instituciones adecuadas al presente.

Así, por falta de sentido de nacionalidad, ha sufrido el predominio de influencias extranjerizantes en lo político y cultural; sus partidos políticos se han internacionalizado; se adoptan usos y costumbres opuestos a la tradicional sobriedad de los chilenos; existe desinterés por la defensa de la soberanía y el territorio de Chile; se desconoce el rol fundamental de las Fuerzas Armadas; se ha carecido de una política externa con objetivos definidos, y falta la fe en un destino nacional propio.

Por pérdida del principio de autoridad, el país ha tenido gobiernos débiles, sometidos a las influencias y presiones de los partidos políticos, y de las oligarquías económicas o gremiales; ha aceptado huelgas permanentes, de cualquier índole; destrucción de la ejemplaridad educacional, de la autoridad de los padres y de la unidad familiar; privilegios y amnistías para quienes tienen influencia; y la falta de una real conducción política del país, hacia un destino nacional.

Y la incapacidad para modernizar las instituciones del Estado, ha significado mantener un sistema formalista político, incapaz de conducir; crear una burocracia gravosa e incapaz de administrarla; un aumento constante de sus gastos improductivos, y la asfixia consiguiente que recae sobre los hombres de trabajo. Ha significado, la ingerencia y control de la politiquería en los manejos estatales y en la administración pública; la división profunda entre los politizados grupos dirigentes y el país real; el debilitamiento de la voluntad de lucha y de la iniciativa creadora; y la cómoda adopción de fórmulas, consignas y soluciones ajenas a la realidad chilena, contrarias al interés y a las posibilidades de Chile.

Falta de sentido de nacionalidad.— Internacionalismo de los partidos políticos.

Los partidos políticos chilenos obedecen, casi todos ellos, a ideologías extranjeras. En forma expresa reconocen el vínculo que los liga a una organización foránea, disfrazando sólo la condición de su dependencia o de su financiamiento externo, pero vanagloriándose de que su pensamiento corresponde a una ideología internacional. Así sucede con el Partido Comunista, el Socialista, el Democratacristiano y hasta el propio Partido Radical que, a despecho de su origen histórico, se ha esforzado por incorporarse a la Social Democracia y a la II Internacional.

Y por este internacionalismo ideológico, los partidos mencionados vienen a repetir tardíamente en Chile las viejas y, a veces, ya superadas disputas ideológicas europeas. Mientras las naciones de aquel continente dejan que el polvo cubra las ideologías del siglo XIX —pues todas ellas son decimonónicas—, acá, en un país joven, los "avanzados", los "progresistas", los "revolucionarios", dividen a los chilenos con posiciones y teorías que corresponden a otras épocas y a otras naciones, deforman los problemas concretos y esterilizan la acción gubernativa con esquemas y programas que no obedecen a ninguna realidad, que no contienen solución alguna, y que sólo sirven las líneas de esas ideologías importadas o los fines estrechamente partidistas.

Pero no sólo son extranjerizantes las ideologías, también es extraño a Chile el estilo que intentan imponer. Unos siembran un odio entre grupos de chilenos que no es verdadero, que es una invención perversa para producir la quiebra y el caos social, y para engendrar la violencia que les permita llegar a la dictadura comunista. Otros, torpes o ingenuos, siendo hoy día Gobierno, les siguen el juego del odio y del divisionismo, y son las antitesis del estilo nacional. Su espíritu partidista, excluyente y cerrado, que no acepta discusión de su programa; su lenguaje espectacular y teatral, alejado de la serenidad y sobriedad chilenas; la explotación política de cada cosa que se hace, por pequeña que sea, para dejar deslumbrado al pueblo, son todos los matices de un estilo falso que va alejando la verdad, y que, por el empleo masivo de todos los medios modernos de publicidad, pasan a ser instrumentos coercitivos disfrazados, destinados a presionar e ilusionar a la opinión pública.

La existencia de un estilo falso, que no se identifica con el estilo político de la nación, conduce fatalmente al fracaso de la acción del Gobierno que lo sostiene. Produce una discordancia interna en el país, que llega al hombre común que no se siente interpretado por el partido gobernante ni por sus actos; que siente sus anhelos tergiversados, y que se siente confuso, inseguro, pero que sí sabe una cosa: que no está conforme.

Pero esta falta de sentido nacional, de la mayoría de los partidos políticos, produce otros graves daños a Chile. No sólo en su plano interno, en que, además, de lo dicho, lo somete a tensiones violentas absolutamente inútiles y totalmente ajenas a sí mismo; sino muy especialmente en sus relaciones internacionales y en la defensa de su soberanía.

En sus relaciones exteriores, porque el Gobierno partidista se siente próximo y afín a los grupos ideológicos similares de las otras naciones y adversario o distante de quienes sustentan otro criterio político. Y pasa, así a ser amigo de partidos y no de países, o enemigo de los gobiernos de países amigos.

Basta mirar la desastrosa tendencia del gobierno democratacristiano que intentó llevar una política internacional ideológica... Quiso exportar su experiencia de la "revolución en libertad" a todo el continente. Nunca había llegado a ser más débil y delicada la situación de Chile en América, que con estos febriles experimentos. Tarde, y a prisa, han tenido que poner marcha atrás.

El mismo criterio partidista y no nacional, ha hecho que se descuiden funciones esenciales del Estado. El enfoque político e ideológico hace que se ponga el acento en aquellas funciones que interesan a los fines del partido gobernante, y que se descuiden otras, por fundamentales que sean. Así ha sucedido con las Fuerzas Armadas, tanto en lo que se refiere a la situación económica de sus miembros, como en lo que se refiere a su armamento. Para apreciar lo primero, basta comparar que un general gana menos que un asesor de la "Patria Joven" incrustado en cualquier repartición pública; un capitán, menos que un promotor de Indap; un sargento, con 25 años de servicios, menos que un portero recién contratado en la CORA.

Y para apreciar lo segundo, sería suficiente confirmar que las leyes que destinan recursos especiales para la Defensa Nacional, como leyes reservadas, no se cumplen, pues los fondos son desviados por el Gobierno a otros fines.

No rige, pues, como norma suprema de la acción pública, el sentido nacional. No existen, limpio y firme, un espíritu chileno que oriente la política gubernativa, que dé contenido a las posiciones sustentadas por el Partido Democratacristiano ni por la oposición marxista o sus aliados actuales del radicalismo. Antes que levantar y fortalecer la nacionalidad, que recrear la mística chilena que supo forjar Portales en los albores de la Patria, los partidos políticos chilenos, internacionalizados y llenos de añejas ideologías, la destruyen con sus odios y resentimientos, la dividen con sus posiciones dogmáticas y la frustran con la incapacidad de sus teoricismos verbalistas.

Unica excepción, organizada y combatiente, en este coro de desnacionalización de la política chilena, la constituye el Partido Nacional. Junto a él, aún sin forma nítida, el sentimiento de chilenidad de la inmensa mayoría de los hombres y mujeres independientes.

Pérdida del principio de autoridad. Ineficacia de los gobiernos partidistas.

Entre los mitos modernos, está el de confundir la democracia con los gobiernos partidistas. Se sostiene que son éstos la defensa más eficaz de la persona humana y de sus derechos fundamentales, la expresión misma de la democracia y de todo régimen normal, y, en fin, la última palabra del progreso que ha alcanzado la vida política de la humanidad.

Si se acepta lisa y llanamente este mito, habría que convenir en que la acción de los partidos es positiva. Nadie, entonces, se podría explicar el por qué han fracasado; por qué se produce la esterilidad de las luchas partidistas, el desprestigio de los partidos y de los políticos y aún de la política misma, y del órgano típico de su acción, el Parlamento. Ni tampoco se explicaría el divorcio profundo y total entre este mundo político, tan reducido en su número y tan menudo en su visión, y el país real, que trabaja, que paga los derroches y los experimentos, que se frustra en sus esperanzas y se desespera en sus necesidades.

Pero ni el mito es verdadero, ni los partidos políticos adueñados del poder son eficaces.

Por el contrario, los gobiernos partidistas son necesariamente ineficaces.

Son ineficaces, en primer lugar, porque han renunciado al pri-

mer atributo de todo Gobierno: la autoridad. La autoridad se ha debilitado, y el gobernante se ha sometido al arbitrio del o de los partidos que lo apoyan. Esto, que no es sólo de hoy, se ha venido repitiendo, con diversas características, desde la revolución de 1891, en que virtualmente los partidos junto con derrocar a Balmaceda arrebataron la autoridad que Portales y la Constitución de 1833 dieron a los Presidentes de la República.

Después de la borrachera del juego político parlamentarista, la tenaz lucha del Presidente Arturo Alessandri y la intervención de los militares permitieron establecer la Constitución de 1925. Pero también allí, los enemigos de la autoridad presidencial cuidaron de imponer una fórmula que, aún en una constitución presidencialista, deja demasiadas válvulas abiertas por las que entra el agua parlamentarista. Y esas aberturas han sido utilizadas por los partidos, con las más graves consecuencias.

En los 43 años transcurridos, se ha producido una constante lucha entre el Ejecutivo y el Parlamento, que es, con frecuencia, más bien, una lucha entre el Presidente de la República y los partidos políticos, sin excluir, por cierto, a los partidos de Gobierno.

"Como consecuencia de ello, —ha señalado el senador Bulnes— se abre una alternativa forzosa: o el Presidente se resigna de hecho a no ejercer parte de sus atribuciones, dando paso a un semiparlamentarismo de facto, como ocurrió en tiempos del señor González Videla, o sobreviene el divorcio y el conflicto latente entre ambos poderes, como comenzó a suceder bajo los breves gobiernos de los señores Aguirre Cerda y Ríos Morales y como aconteció durante todo el segundo mandato del señor Ibáñez. Ambos términos son inconvenientes. El primero, porque el parlamentarismo de facto es una solución extraconstitucional y arbitraria, que puede desembocar en la anarquía o el desgobierno. El segundo, porque la lucha de poderes produce, como efecto inmediato, la esterilidad gubernativa y el desorden en la legislación, acarrea a la larga el desprestigio de ambos contendores y expone el país a una crisis de régimen".

Es la consecuencia directa de las pugnas partidistas por imponer sus puntos de vista o sus intereses electorales, y de la constante presión que ejercen sobre el gobernante.

Así lo ha afirmado el Presidente Jorge Alessandri. En su último mensaje presidencial, sostiene: "Los hechos que anoto, demuestran la lucha permanente en que he debido debatirme entre lo que aconsejaban mi conciencia y mi experiencia y la necesidad de conservar una mayoría parlamentaria, de la cual ningún Presidente de

la República puede prescindir si desea mantenerse dentro de las obligaciones constitucionales actuales".

Y tan honda y seria es la crisis planteada al régimen chileno, tan irreparable es el mal que causa al país mismo, que hizo decir al Presidente Alessandri: "En último término, mi verdadera responsabilidad consistiría en no haber saltado esa valla".

Afirmación clara, rotunda y que obliga a los chilenos a meditar. ¿Puede, por inercia, por acomodo, por dejar el campo entregado sólo a los grupos políticos que se niegan a ir a una reforma política a fondo, continuarse esterilizando la acción gubernativa? ¿Si esto lo ha dicho un muy buen gobernante, que contó con el apoyo de los partidos sobre los que pesa mayormente la gran tradición política chilena, qué no podrán decir quienes, sin sus condiciones personales de estadista, tengan además la presión desbocada, la ideología caótica, la dosis de apetitos y resentimientos que cobijan partidos con ambición y finalidad totalitarias?

La respuesta, si se tiene la sinceridad de darla sin disfraz ni cálculo interesado, debe ser y es, con certeza, la más dramática confesión de fracaso. Pero no se trata del fracaso de tal o cual intento de administrar el Estado. Es el fracaso de toda una concepción política, que ha cobijado el mito de confundir la democracia con los gobiernos partidistas.

No obstante ser un hecho ya probado y demostrado en la historia chilena, que registra con claridad meridiana la capacidad constructiva de los gobiernos nacionales y la ineficacia de los gobiernos partidistas, el espíritu oligárquico ha predominado en los grupos dirigentes de la gran mayoría de los partidos políticos, a través del tiempo. Se ha insistido, pues, a sabiendas de su influencia, en repetir una y otra vez la fórmula partidista, y se ha negado el Congreso Nacional a dar paso a la reforma constitucional tan necesaria.

Este hecho, ha llevado a don Jorge Alessandri a decir, en su último mensaje: "Reconozco que soy culpable porque debí afrontar con decisión la crisis constitucional; renunciar o imponer la reforma profunda de la constitución que nos rige".

Destrucción de la disciplina social.

La autoridad perdida en el Supremo Gobierno, trasladada a los partidos, deja de ejercerse en la vida nacional. Se quiebra la disci-

plina y el respeto a la autoridad misma. La misma presión del Partido de Gobierno sobre el Gobierno, la presión desde el parlamento en defensa de grupos económicos o gremiales, o en un fácil e irresponsable sentido izquierdizante en defensa de cuantos rompan el orden público, se ha transformado en la real semilla del caos y la anarquía.

Ha sido más eficaz, aún, que la prédica incesante del comunismo, la blandura congénita de los partidos que viven temiendo el mote de reaccionarios y la calificación de ser antipopulares.

Ahora, el más irresponsable de estos partidos, el Democrata-cristiano, está en su propio gobierno cosechando la siembra de tantos años. Pero también, con la increíble irresponsabilidad de continuar impulsando, con todos los medios que el Gobierno le otorga, la agitación social, el desorden, y la anarquía y aún la revolución que ciertamente no podrá controlar.

Las tomas de escuelas por los estudiantes secundarios, con cualquier pretexto; de universidades por los universitarios, con apoyo abierto del Gobierno y del partido de gobierno; de catedrales por curas y monjas seglares; de fábricas y de fundos, por obreros dirigidos muchas veces por funcionarios públicos, son la expresión de esta anarquía existente.

Para poner fin a la crisis política que causa la pérdida de autoridad, que se quiso salvar en 1925, y que el pueblo insiste, una y otra vez, en buscar dentro de sus posibilidades, hay que entregar el Gobierno a un hombre independiente y nacional, colocado por sobre intereses y partidos, que sea garantía, como Presidente de la República, de que velará no sólo por los cien que siempre gritan, sino por los miles y miles que ahora callan.

Incapacidad para modernizar las instituciones del estado.— Formalismo político.

La mantención de un sistema constitucional viciado, no obstante la evidencia de su fracaso, no dice sólo relación con las intervenciones del Parlamento en el manejo económico y financiero del Estado, sino que afecta también a toda la vida de la nación.

Existe hoy día, constitucionalmente vivo y vigente, un formalismo que está muerto y enterrado. Se supone que las formas políticas establecidas, son representativas del país real. Que efectivamen-

te los doscientos parlamentarios, por ejemplo, que pertenecen a los siete u ocho partidos políticos legalmente inscritos, son el espectro de la nación toda. Que la vida política que desarrollan, sus enfrentamientos, sus pugnas, sus intereses, son la expresión de la vida nacional.

Ello no es efectivo. Por el contrario, existe un divorcio total entre el país político y el país real. Cualquiera que sean sus causas, entre las que no falta el cansancio, el escepticismo y la frustración que la esterilidad de la política criolla han provocado en las gentes, el divorcio es hoy día mayor que antes.

Los izquierdistas y revolucionarios de todos los tipos, hablan día a día de que el pueblo está consciente de sus luchas, y que son ellos sus representantes legítimos. Hablan en nombre y en una jamás confirmada representación popular. Tal como otros, los radicales, hablan en nombre de la clase media, a la que hace ya mucho tiempo, desde que se hicieron socialistas, que han dejado de defender. Los partidos de derecha, en alguna medida, creían representar a sectores empresarios y comerciantes.

Pero estas representaciones políticas no las dice el pueblo ni la clase media, ni empresarios, ni comerciantes, que no se sienten representados, sino que las afirman los que se suponen mandatarios.

Las formas políticas existentes, en su conjunto, son una cáscara hueca. El hecho cierto es que el hombre de trabajo, sano y patriota, se ha excluido en su inmensa mayoría de la lucha política. Ni siquiera intenta influir en sus resultados. Los reiterados fracasos, los vicios partidistas, el criterio electorero, cuando no el uso de los recursos más vedados, que llenan la crónica de la politiquería menguada, han dejado el más amargo escepticismo en los hombres de posición dirigente y el más desolado sentido de frustración en la gran mayoría de los chilenos. Se han retirado de la política y le han dejado el campo abierto a inveterados demagogos o a improvisados teóricos, o a no pocos arribistas y aventureros, contra los que se estrellan las minorías de políticos por vocación nacional, que aún en las más difíciles circunstancias, han mantenido con firmeza sus posiciones.

El hombre de trabajo se ha retirado de la política. Pero ahí está, el que forma Chile, sosteniendo el pulso de la Patria con su esfuerzo y su inteligencia. Levantando y dirigiendo industrias, a pesar de los tributos y costos altos, y de los precios artificialmente fijados, que lo frenan. Vivificando la tierra y haciéndola producir contra los elementos climáticos, y no obstante la persecución y la

incertidumbre. Ahí están los médicos que superan la falta de medios, con una capacidad que se extiende de nuestras fronteras. Los juristas que siempre han dado equidad y prestigio a Chile, y que hoy ven la destrucción del Estado de Derecho y aún de la esencia de la Ley, al perder ésta su generalidad y su normalidad. Y, en fin, arquitectos, técnicos, empleados y obreros, empeñados en levantar un país, a pesar de los sismos que la tierra produce reiteradamente en este rincón del mundo, y de los más frecuentes, más prolongados, más constantes y tanto más desvastadores, que la ineficacia del régimen, el desgobierno, el gasto fiscal y la inflación hacen recaer sobre los hombros de todos los chilenos.

Ruptura del derecho y menosprecio a la ley.

La tradición política chilena se formó en el respeto a la Ley. Respeto que se fortaleció con todo el ordenamiento jurídico, público y privado, que los gobernantes portalianos establecieron, y con la ejemplaridad de su acatamiento.

Ley, que era el cauce nítidamente trazado, profundo y eficaz, que constituye el orden que protege al más débil, de los abusos del más fuerte; al ciudadano, del atropello de quien detenta el poder.

Ley, que era la norma que regía para todos, porque era igual para todos. Y que nadie, por altamente colocado que fuese, se exceptuaba de ella. ¡Con qué nostalgia se puede recordar el ejemplo de don Manuel Montt, quien no vaciló en hacer cumplir la ley y desterrar al jefe de la iglesia chilena, que con finalidad política se enfrentó a la ley y se negó a acatarla!

Pero todo ello se ha perdido en Chile.

Se perdió primero, el respeto a la ley, por los propios que hacen la Ley. Se la transformó en mecanismo de ventajas políticas y partidistas. Se la transformó en herramienta para otorgar prebendas, para pagar favores y apoyo electoral. Se la hizo, ya no general, sino particular y aún individual. Se desquició todo ordenamiento jurídico, porque se creyó que abusando de la ley se podía hacer la felicidad del pueblo, "y se le pidió a la ley que repartiera los bienes, la justicia, las posibilidades, las esperanzas, y en cada problema, aún en los más estrictamente domésticos, como es el día en que puede o no puede comerse cierta clase de alimentos, y también en los más trascendentales, que hacen la riqueza o la pobre-

za, como es el crédito y el manejo de la emisión de billetes" (Víctor García G.).

Como reacción, luego, de un Ejecutivo amarrado y constreñido por una maraña de leyes, se desbordó a la Ley, y nacieron las facultades para que aquel ejerza funciones sin sujetarse a la Ley. Y esto ha significado, en especial en los cuatro años de este Gobierno, que ya no es la ley la que determina objetivamente la norma pohibitiva, permisiva o imperativa, sino que es el funcionario quien lo determina.

De tal manera que la creciente intervención del Estado en la economía, en la propiedad, en el trabajo, en la vida y costumbres, y la destrucción de la legalidad, significa entregar a ciertos funcionarios omnímodas facultades para enriquecer o arruinar a personas, fijando precios, alzando o reduciendo aduanas, aumentando remuneraciones o reduciéndolas por las simples emisiones de billetes.

Con el fin de proteger ciertos arbitrios técnicos creados por la acción del Estado, se han fijado delitos nuevos que, por no ser hechos contrarios a las normas de derecho natural, no los siente nadie como delitos, ni son conocidos ni comprendidos, y su alcance resulta siempre dudoso, dependiendo generalmente del funcionario el que sea o no determinado. Y el ciudadano vive atemorizado, como el conductor de un vehículo que está con el sobresalto permanente de cometer una infracción.

"En otras palabras —dice don Víctor García— hemos creado un grupo de personas dóciles al Ejecutivo, temerosas de la infracción, que por no estar protegidos sus derechos por las leyes son incapaces de iniciar luchas políticas y de enfrentar a los poderes públicos: ¡Qué lejanos están los días del molinero de Postdam, que el más grande de los emperadores de Alemania no pudo quitarlo de su camino, porque lo protegía la ley!".

Un estado socialista para un partido totalitario.

Conjuntamente con el proceso de destrucción de la ley y el traslado de su norma objetiva al arbitrio funcionario, se ha venido creando una burocracia gravosa, cada vez mayor, cuyas funciones han venido absorbiendo siempre mayor ámbito y abarcan ya la mayor parte de las actividades nacionales.

Es decir, que en Chile, contradiciendo lo que tanto se pregona

de que tiene una estructura capitalista, existe verdaderamente un Estado socialista; un Estado socialista y burocrático.

El Estado de Chile es socialista y burocrático, porque cubre, controla, participa, dirige o interfiere en todas las actividades nacionales; y porque todas ellas, de una u otra manera, deben sufrir y recurrir ante el omnipotente funcionario.

Bastaría una somera lista de las actividades que realiza el Estado y de su participación en la vida nacional, para comprobar lo anterior.

La misma ineficacia que ha afectado al régimen existente y a los gobiernos partidistas para enfrentar con éxito los problemas y su propia incapacidad para administrar al país ha movido a ir progresivamente creando este monstruo voraz e ineficaz, costoso y tramitador, que es el Estado actual.

Una confusa mezcla de finalidades contradictorias, desde el afán persecutorio al espíritu creador individual —que mueve a arruinar la empresa que se inicia, con la competencia estatal—, hasta ampliar el campo de las influencias políticas del Gobierno —tanto colocando en nuevos puestos fiscales a decenas de miles de correligionarios, como utilizando el mayor poder económico controlado por el Ejecutivo—, han venido estimulando tal socialización. Pero no ha habido, sino por excepción, afán serio y meditado, atinado y bien concebido, al crear o perfeccionar instituciones públicas administradas por el Estado.

La verdad, es que con la sola excepción del Partido Nacional, todos los partidos políticos que se suponían antitéticos, que eran los extremos opuestos de alternativas combatientes, se han identificado en una misma adoración a un colectivismo totalitario, sea materialista o sea falsamente cristiano. Y se han unido, también, en igual adoración, a un socialismo económico, estatista y burocrático, necesariamente liberticida. Tras ellos, por cierto, para no perder su parte, en esta socialización y burocratización ruinosa para Chile, pero jugosa para sus participantes, corre también el Partido Radical.

Explicación de esta colectivización apresurada, se encuentra en el sometimiento consciente o inconsciente de la izquierda chilena al Partido Comunista. Se puede apreciar la convergencia de los fines de esos partidos izquierdistas con los propósitos del Gobierno demócrata cristiano; más tarde su nefasta competencia demagógica; y, en los días recientes, la desesperada búsqueda de unión y formación de un frente común. De esta manera, a cuatro años de lanzarse el

último grito de "o democracia cristiana o comunismo", que tan buenos resultados electorales y financieros diera al actual partido de gobierno, ya están buscando la manera de apagar sus ecos, borrar las huellas, y de prepararse para comenzar a engañar nuevamente a los chilenos: ahora llaman a luchar, junto con los comunistas, por una "vía no capitalista".

El camino del totalitarismo.

Llegado al poder, el Partido Democratacristiano, siguiendo el impulso de su carácter revanchista, de su ideología dogmática, y de su ambición arribista, derivó hacia el totalitarismo. Su acción se confunde con la acción gubernativa, y aprovecha para sus fines electorales los recursos del erario, las franquicias que abre el poder público, y el empleo como arma de presión y fuentes de recursos proselitistas, del crédito, de las ayudas internacionales y de los tan proclamados proyectos de un supuesto desarrollo social.

El Gobierno de Frei, ha impuesto al Estado Chileno el programa del Partido Demócrata Cristiano, y, como sucedió con el peronismo en Argentina, todos los actos de la Administración Pública, desde el matasellos de correos, hasta los créditos del Banco del Estado o los del Indap, y hasta el uso de afiches del Partido por parte de los organismos fiscales, han sido puestos al servicio de los intereses y de los fines partidistas.

Lo que ha resultado una sorpresa, es que acá el partido de gobierno ha sobrepasado las marcas registradas en otros países, ya que ha llegado a utilizar a funcionarios públicos, y los medios fiscales a su disposición, para cometer toda clase de variados delitos: desde asaltar a campesinos, hasta injuriar a las FF. AA.

Un partido político, así concebido, que logra alcanzar el poder del Estado, impone a éste su programa y su ideología. Es decir, identifica al Estado consigo mismo y se confunde con éste. Y, entonces, aunque en la superficie se respeten algún tiempo las formas, se perfecciona el totalitarismo. Los adversarios o los críticos de algún punto del programa partidista, pasan a serlo del Estado y como a tales, incriminados. Los funcionarios del Estado pasan a serlo del programa y, por ende, de la acción del Partido. El poder del Estado, sus instrumentos, y sus recursos, pasan a servir los fines y a realizar la ideología del Partido. Y por ello es que cada vez más se fortalece al Estado, se le dan más recursos, más interven-

ción, más control, más dirección, más impunidad para aplastar y presionar al gobernado, para destruir el derecho y reemplazarlo por el predominio funcionario. Todo para el Estado. Que equivale a decir, todo para el funcionario que lo administra. Lo que es igual, a todo para el Partido que lo nombra y lo controla.

Un gobierno para el partido demócrata cristiano.

Esta es la manera como actúa y ha actuado el Partido y el Gobierno demócrata cristiano. Busca controlar en forma absoluta el Estado y todas las actividades nacionales, lo que evidencia un espíritu totalitario. Impulsa la estatización de las grandes actividades productoras para ampliar y consolidar su influencia sobre las fuentes de la economía.

Trata de manejar las Universidades, a través de una reforma que entregue su dirección y su orientación a un Consejo controlado por el Gobierno demócrata cristiano. Asfixia la capacidad creadora del trabajo privado con trabas y tributos insostenibles; y desalienta el ahorro particular para monopolizarlo por el Estado, aún a costa de hacerlo ineficaz y significar menores ingresos fiscales. Ha intentado e intenta copar los medios informativos y, no obstante el control que ejerce sobre las radioemisoras y también sobre la televisión, creará una radio propia y un canal estatal bajo su directo control. Ha monopolizado la facultad de dividir la tierra y ha transformado la reforma agraria en arma política para sojuzgar a los campesinos, primero, con la mentira de hacerlos propietarios, y, luego, con la tiranía de los asentamientos. Ha engañado a los pobladores con una Promoción Popular que nada sólido les entrega y que crea grupos sociales estagnados, sin estímulos para mejorar de condición. Ha buscado, por medio de una ley de Juntas de Vecinos, crear mecanismos que le permitan controlar la vida comunal, con el propósito de someter políticamente a los ciudadanos. Y, en general, puede sostenerse, que no ha trepidado en utilizar todos y cada uno de los medios de que dispone el Estado, para servir la política y los fines partidistas; inclusive, ha utilizado con tal fin las relaciones exteriores de Chile.

La creciente depresión económica que sufre el país, es consecuencia directa de la acción partidista del gobierno y de la finalidad totalitaria del Partido Democratacristiano. La inflación se ha agravado por los desmedidos gastos fiscales, que no constituyen inversión

reproductiva, sino el despilfarro de los mayores recursos que el Gobierno ha tenido, para financiar actividades políticas y electorales. La depresión económica es producto de restricciones que obedecen, también, a un criterio político o ideológico contrario a la actividad productora, al ahorro y las inversiones particulares, cuya aplicación ya ha logrado disminuir las fuentes de trabajo y reducir la capacidad de compra del pueblo.

Como siempre, paga el pueblo.

Este proceso repercute, en primer lugar, sobre los trabajadores. Sufren la frustración de sus esperanzas y anhelos y quedan expuestos a la inflación y a la inseguridad de sus empleos; y en lugar del mejoramiento y bienestar que se les prometió, sólo reciben la humillación de las dádivas interesadas y el amargo sabor de una realidad difícil que la propaganda y el verbalismo no pueden alterar.

Repercute, también, sobre la clase media. Después de haber visto salir de sí misma a los dirigentes demócratacristianos, ha padecido más que nadie las consecuencias de la acción de éstos desde el Gobierno. Expoliada por impuestos al ahorro y por tributos desmedidos; sufriendo las medidas restrictivas del comercio y la politización del crédito; padeciendo la crisis económica en todos sus efectos, y la inflación, frente a la cual no tiene siquiera reajustes, la clase media está siendo aplastada, más que nadie, por el estatismo socialista y totalitario de este gobierno.

Repercute sobre los hombres del campo, donde no sólo se ha fabricado un ambiente de odio y de violencia, sino, donde sea que ha llegado la CORA, se ha destruído la clase media agrícola laboriosamente formada; ha hecho perder a los campesinos sus ahorros, ha expropiado inconstitucionalmente a los inquilinos los derechos que emanan de su contrato de trabajo sin indemnización de ninguna especie, y ha sometido a la ruina económica y al sojuzgamiento político a los asentados. Ha impedido la ejecución de nuevas obras de infraestructura agrícola, por la inseguridad que crea, y por el desconocimiento de su valor en una eventual expropiación.

Repercute, en fin, sobre todos los chilenos, que pagan en este instante, el fruto de las teorizaciones vaporosas de los ideólogos internacionales, su ignorancia de la realidad chilena, sus prejuicios y frivolidad; y que pagan, también, las angustias económicas, el caos

desorden y anarquía que han desatado en Chile los aprendices de brujos del gobierno demócratacristiano.

Los partidos de izquierda ayudan a soplar el fuego.

El estrago que causa al país y a su tambaleante economía el gobierno de la democracia cristiana, es ayudado en todas formas por los opositores comunistas, socialistas y radicales. En primer lugar, porque estimulan el desorden y la anarquía, directamente a través de sus propios activistas e indirectamente, empujando más y más a los grupos mayoritarios dentro del partido de gobierno. Y, en seguida, porque han otorgado a la democracia cristiana cuanto ha solicitado para desatar la tormenta: impuestos y más impuestos, cuantiosos recursos para los gastos secretos de intendentes y gobernadores, destrucción de la garantía constitucional del derecho de propiedad con la sola excepción de la gran minería del cobre, una reforma agraria colectivista y en más de una oportunidad: impunidad a la responsabilidad de personeros del gobierno en hechos delictuosos producidos.

El Partido Comunista tiene finalidades de sobra conocidas. Cualquiera que sean los fines próximos que señala, por ideología y estructura propia camina hacia la dictadura del proletariado. La naturaleza y los métodos de esta dictadura, una vez en el poder, son también conocidos sobradamente. Baste recordar los ejemplos sangrientos de Hungría y de Checoslovaquia, recientemente, ambos apoyados por el comunismo en Chile, para comprender el sentido y la finalidad de todo gobierno comunista.

El Partido Socialista, actualmente dividido por razones que escapan a la exacta comprensión de una persona que no sea de sus filas y que no parecen ser sino de naturaleza personalista, ha perdido decididamente su característica más interesante, una evidente independencia de toda vinculación foránea, para pasar a ser también partido internacional, con vínculos de diverso orden con movimientos y gobiernos foráneos. Por otra parte, su adhesión a una violencia revolucionaria, a una táctica guerrillera, que en nada se justifica en Chile, no se explica por otra causa que su definitiva falta de apoyo popular y por la pérdida de su fe de llegar electoralmente al poder.

El Partido Radical, que se sigue autoproclamando defensor de la libertad y de la democracia, e intérprete de la clase media, ha abandonado precisamente esa su vieja trinchera laica, libertaria y demo-

crática, para buscar su aliado en el más absoluto y definitivo enemigo de aquellos principios e ideas: el comunismo internacional. Pero no sólo este hecho revela el caos mental que hoy rige en el ya superado radicalismo. No se comprende cómo quien se autodefine como socialdemócrata, y que solicitó hace pocos años su ingreso a la II Internacional, puede aliarse con el comunismo, exacta y cabalmente rechazado y combatido por aquella. No se comprende cómo quien se dice intéprete de la clase media, puede llamarse asimismo socialista —que es ser esencialmente proletario— y estatista, que se contradice a fondo con aquella.

Nadie que sea partidario o aliado del marxismo, que pretenda imponer el socialismo y un estatismo absorbente, puede ser defensor ni intérprete de la clase media. La clase media es fruto de la libertad personal, del respeto a la ley y al derecho, y, en especial, de la libertad de trabajo y de la iniciativa individual. Y sólo en este ambiente puede la clase media desenvolverse naturalmente y progresar.

Por ello es que la clase media es la más estable de las clases sociales, la más estabilizadora; la que con mayor ahinco defiende su libertad fundamental y la que menos se envenena con los prodigios alquimistas de los ideólogos; es sólida, sensata, y no se deja llevar por el ilusionismo. Y por eso es, también, que los marxistas o los colectivistas demócrata cristianos la pretenden destruir, sumergir en la masa anónima, obediente y carente de personalidades y relieve; sea esta el proletariado, mero término en cuyo nombre se oculta la dictadura del Partido Comunista; o aquel vago comunitarismo, rótulo que oculta también al totalitarismo demócrata cristiano.

No cabe, en consecuencia, duda alguna de que constituye una verdadera traición a la clase media el apoyar o aliarse con el comunismo, o propiciar el socialismo y el estatismo.

El Partido Radical es hoy día reo de tal responsabilidad, ya que el éxito de sus tentativas y alianzas sería someterla al estatismo burocrático y totalitario, aplastar todas sus iniciativas creadoras y perder sus posibilidades de progreso. Cuando fue partido de gobierno, fundamentalmente porque la clase media le dio su confianza y su adhesión, frustraron sus esperanzas con su ineficacia; y contribuyó en gran medida en la creación de un estado burocratizado y desquiciador, cuyo peso recae principalmente sobre los hombres de trabajo de esta amplia clase media. Han transcurrido años y duros, pero, en vez de reflexionar, de reconsiderar viejos errores, ahora insiste el Partido Radical en agravar, con sus alianzas y su posición socia-

lista y estatista, esos errores, ayudando al aplastamiento y destrucción de la clase media.

Tales son pues las amenazas que se coaligan en contra de Chile. El horizonte oscuro, cerrado de inquietudes. La frustración de su pueblo. La paralización de su economía. La quiebra de su fe nacional. La anarquía latente y la revolución y el odio crecientes. Todos provocados y estimulados tanto por el partido de gobierno como por los partidos marxistas y sus aliados.

Para luchar contra este estado de cosas, se creó el Partido Nacional.

No como una mera fusión de fuerzas existentes, sino con sentido propio y con finalidades renovadoras.

"No obstante las valiosas tradiciones que legaron los Partidos Liberal, Conservador y Acción Nacional, —dijo el senador Pedro Ibáñez— el Partido Nacional no será la continuación de ninguno de ellos. Nuestra misión consiste en interpretar mediante nuevos pensamientos políticos y nuevos métodos de acción a los vastos sectores que no integraron o que desertaron de los partidos tradicionales y que en futuro habrán de dar consistencia al nuestro".

El partido nacional, movimiento rectificador:

"El Partido Nacional aspira a ser una alternativa diversa, que permita construir un cauce distinto. Distinto, incluso, a las fuerzas que le dieron origen, porque a su brillante tradición y a la ejemplaridad de su historia, suma un impulso creador de inspiración moderna y realista que permita desarrollar el trabajo, la seguridad y el progreso que todos los chilenos anhelan crear".

"El Partido Nacional aspira a constituirse en la vanguardia de un vasto movimiento renovador, sin limitaciones partidistas, en el que tengan amplia cabida todos los sectores que dinamizan el esfuerzo de Chile". (Declaración del III Consejo General).

La gravedad de la crisis política chilena, cuyos aspectos principales se han reseñado precedentemente, no permite que pueda ser enfrentada exitosamente con medios ni fórmulas usuales. Esta vez afecta demasiado al fondo de la vida nacional, y reúne fuerzas de tal modo destructoras de la chilenidad, de su sentido de la vida y la cultura, de su idiosincrasia y de su tradición, que no pueden combatirse sino con una acción distinta a las usuales, con una concep-

ción política diferente, y formando un gobierno también liberado de trabas esterilizadoras.

La misma ineficacia ya señalada de los gobiernos partidistas, el desprestigio general que recae sobre los partidos políticos, y el divorcio total entre el país real y el país político, están señalando bien claramente la ninguna posibilidad de que la solución a la crisis que vive Chile, provenga de fórmulas partidistas. Ni un Partido, ni una colusión de partidos. Ni frente cívico, ni frente popular, ni frente democrático. Todos son incapaces de imponer las medidas rectificadoras que se requieren, porque serán afectados por ellas; son incapaces de recrear en Chile unidad y mística nacional, porque carecen de ambas, trasplantados en sus ideologías extranjerizantes; y son incapaces, en fin, de reconocer errores y de aceptar que un nuevo espíritu, chileno, sin adornos ni adjetivos que lo limiten, vuelva a presidir la vida nacional y a orientar el esfuerzo de todos para construir una nueva república.

La solución es muy diversa y no puede provenir sino de una movilización de la conciencia nacional; de una acción que encarne en el país entero, en el Chile real. Que sacuda el escepticismo de sus grupos sociales y laborales dirigentes, y los mueva a asumir responsabilidades políticas. Que disipe la frustración que abruma al pueblo, y vuelva a tener, como tuvo antes, fe en Chile, como la tuvo al crear esta Patria en la dura tierra chilena, en el desierto, en el mar, en 1837, en 1879, . . . Que borre el odio que le inyectan los resentidos y los agentes del comunismo internacional.

La solución, pues, no es ni puede ser un Partido Político. Y no es sincero el que lo pretenda; ni tampoco es posible que nadie piense que lo sea.

El Partido Nacional, en consecuencia, no pretende ser la solución por sí solo. Pero sí es y quiere ser el principio de la solución. Y lo es y lo será precisamente en la medida en que realmente sea, nó un partido político más, sino un amplio y generoso movimiento rectificador.

La ley electoral obliga a quienes quieren servir su vocación pública en forma organizada a inscribir un partido político. Obliga a adoptar una forma, pero no impide que el espíritu sea mucho más amplio: que sea auténticamente nacional.

Por ser auténticamente nacional, debe, en primer término, concebirse a sí mismo, nó como un Partido instrumento electoral, ni grupo de presión, ni arma de defensa de intereses; sino como un

movimiento, cuyos fines y cuyas metas se confundan con el servicio a la Patria y con el destino nacional.

Por ser auténticamente nacional, debe mirar no los estrechos límites de un interés partidario, sino el amplio horizonte del interés nacional; y debe servir a éste, por encima de aquel y de cualquiera otro.

Y por ser auténticamente nacional, debe saber superarse a sí mismo, saber sostener la verdad sin claudicaciones ni transacciones, defender el imperio de la ley y del derecho, y, fundamentalmente, saber buscar para las funciones públicas, a hombres de criterio nacional, aunque no sean de sus filas, siempre que sean capaces y que no estén comprometidos ni con intereses ni con partidarismo irreconciliables con el servicio a la nación.

"No pretendo —puntualiza el senador Bulnes— que los Nacionales estemos absolutamente libres de esta culpa. Pero si puedo asegurar que los que organizamos el Partido Nacional, sacrificando a nuestros viejos partidos, lo hicimos para romper con cualquier hábito politiquero que hubiéremos contraido y para tratar de interpretar a esos independientes de Chile que quieren eficacia y no teorías, espíritu nacional y no partidismo. Aspiramos a servir de avanzada y de motor a un gran movimiento nacional de regeneración política, que tendrá que ser mucho más grande que nuestro partido y que tendrá abierta sus puertas a todos los chilenos de buena voluntad. Este movimiento se está gestando, pero no en los pasillos del Congreso ni en los conciliábulos políticos, sino en el corazón mismo del pueblo, especialmente de las mujeres de Chile que son sin duda las que tienen más visión del porvenir, porque no viven para si mismas, sino para sus hijos".

El Partido Nacional, pues, no es un partido político igual a otros, ni similar a los que se han reseñado en las páginas anteriores. No lo es, y pretende ser, cada vez más y más diferente.

Pretende ser un movimiento rectificador, porque sabe cuán a fondo debe rectificarse la política chilena; cuán a fondo deben reformarse los instrumentos constitucionales políticos; y cuán a fondo deben ser cambiados de cauce, tanto la concepción de la política, como los hábitos políticos de más de medio siglo; y también, cuán de raíz hay que detener y desarraigar, las amenazas colectivistas y totalitarias que el marxismo y la democracia cristiana ambientan en Chile.

Con tal espíritu se formó el Partido Nacional. El primer acápi-

te de sus fundamentos, lo señala claramente. Dice: "El Partido Nacional es un movimiento renovador que se propone restablecer la unidad nacional y el recio estilo que forjó el alma de la chilenidad, modernizar las instituciones de la República para adecuarlas a la época en que vivimos, e instaurar un nuevo orden político, económico y social, cimentado en el trabajo y el servicio a la comunidad".

El pensamiento rector del Partido Nacional, puede ordenarse, para los fines de un somero y rápido esbozo, en los puntos que a continuación se exponen.

Defender la nacionalidad.—

"El Partido Nacional declara que la nacionalidad se fundamenta en el pueblo, la tradición y el medio geográfico, y que su expresión política debe ser un Estado Nacional, guardador de la herencia histórica y cultural, defensor de la soberanía y de los recursos territoriales, realizador de las aspiraciones del pueblo e impulsor de su capacidad creadora". (Fundamentos del P.N.).

La primera de las finalidades del movimiento rectificador que se analiza, es ésta de restablecer la nacionalidad. Y al así decirlo, no se dice que no exista, sino que se quiere transformarla, nuevamente, como fue en largos y fecundos períodos de la historia de Chile, el motor primordial de la conciencia y del esfuerzo de los chilenos.

Por desgracia, el sentido nacional, aquí y ahora, en el Chile de hoy, entre las generaciones jóvenes que se inician llenas de inquietudes y de dudas, o entre las generaciones maduras que han perdido optimismo y fé, escépticas por la dureza de las realidades y la inutilidad de tantos esfuerzos, carece de vigor; son muy pocos los que lo tienen presente al determinar sus actos.

Las doctrinas ideológicas extranjerizantes, en esta declinación nacionalista del chileno, han cumplido su labor desquiciadora. Algunas, a sabiendas. Otras, llevadas de la nariz por aquellas, o por su incurable teoricismo que los hace mirar al cosmos y olvidar la realidad firme de su propio ser.

Si se mira el curso seguido por el sentido y la conciencia de nacionalidad en la historia de Chile, puede comprobarse cómo siempre que aquella ha sido sostenida por hombres que deben definirse como nacionales —Portales, Prieto, Bulnes, Montt, Varas, Balmace-

da—, y ha sido en cambio, debilitada, o al menos colocada en posición subordinada a otros conceptos, por quienes han reclamado para sí los términos de "progresistas", "avanzados" o "izquierdistas". Y ello desde la oposición a la guerra contra Santa Cruz, o hasta la pérdida de la Patagonia. Y, naturalmente, hasta la carencia de tal sentido y conciencia nacional, en los partidos internacionales actuales.

Frente a la vaguedad ideológica de los primeros tiempos de la vida independiente, Portales tuvo clara conciencia de que Chile era una Nación. La concibe, con sentido permanente, como una unidad excluyente de toda dependencia extranjera, dotada de un espíritu, de una fisonomía, honor y dignidad propios, con una vida diferente de sus naciones hermanas, con aspiraciones y posibilidades que señalan su existencia y que debe realizar independientemente.

Y el proceso de la afirmación nacional fue tan rápido, tan definitivo, que no vino sino a demostrar que Portales había calado hondo en la realidad chilena. En seis años, —las fuerzas militares chilenas vencerán por su espíritu nacional, decía Portales—, logró que todo el pueblo sintiese desde dentro esa nacionalidad firme, superior a sí mismo, a cada uno y a todos los habitantes de esta tierra.

El sentido de nacionalidad era algo más que una idea, y no era parte de una ideología en boga a comienzos y mediados del siglo XIX. No tenía nada de las ideas extranjerizantes que venían en la mente y en el espíritu de los "trasplantados" a las orillas europeas del Atlántico. El sentido de nacionalidad era la fuerza interior, el ímpetu, la voluntad de ser del pueblo chileno.

Con él nació, creció, se organizó, se volcó a un esfuerzo gigantesco en el territorio escaso de su geografía difícil, y supo transformarse de la más abandonada y pobre colonia española, en la primera república iberoamericana.

El paso firme se sostuvo sesenta años. La inercia de una tradición demasiado entrada en la sangre, ha mantenido hasta ahora, vivo en el inconsciente de cada chileno, ese mismo sentido nacional. Pero ha cedido vigencia consciente. Ha cedido primogenitura a toda suerte de ideas, de principios, de intereses y de valores. Sea la manida clase o lucha de clases; sea el internacionalismo proletario; sea la lucha extranacional contra el imperialismo; sea la "revolución en libertad" que se quiere exportar; o sea, incluso, los intereses

de cada individuo; todos, a su turno, o conjuntamente, en distintos grupos, han supeditado a la nacionalidad.

El Partido Nacional, como movimiento rectificador, reclama restablecer la nacionalidad a su rol fundamental. Primero y rector de toda la vida chilena. Razón de existir de Chile, y, en lo temporal, de todos y cada uno de los chilenos.

"Para restablecer el espíritu de la nacionalidad —ha señalado el Presidente del Partido, Sergio O. Jarpa— será necesario situar nuevamente a los chilenos, en especial a la juventud, en su escenario histórico, en su medio geográfico y en el camino de su propio destino. Hay que enseñarles, nuevamente, a enorgullecerse de la creación de sus antecesores, a valorar la sangre y los sacrificios que costó forjar una patria libre y soberana. Enseñarles a conocer su territorio, sus riquezas potenciales y la importancia de su ubicación geográfica. Mostrarles las posibilidades que ofrece el futuro, y animarlos a iniciar una nueva etapa de expansión chilena".

Una política externa nacionalista.—

La afirmación de la nacionalidad, trae como consecuencia ineludible la identidad y diferenciación de esa Nación con el resto del mundo. Y, también, la formulación de una política externa acorde con el interés propio de la Nación.

En el mundo de hoy, y así lo constata un observador ocucioso, (Arnold Toynbee lo ha afirmado recientemente), el nacionalismo es una fuerza determinante. Lo es en tal grado, que supera con mucho al capitalismo y al comunismo, y a cualquiera otra conjugación intermedia, como la democracia cristiana.

Para la expresión nacionalista en su política externa, Chile debe, en primer término, haber restablecido como norma rectora de su acción el sentido de nacionalidad; y, en segundo lugar, haber creado una organización política, que responda con eficiencia a los fines nacionales, haber saneado y establecido bases sólidas para su economía, y haber sabido crear estímulos ciertos de trabajo y bienestar para los chilenos. Es decir, debe ser una Nación en forma.

Una Nación en forma puede sostener con firmeza una política externa nacionalista. Y ella para Chile debe significar un esfuerzo por liberarse de dependencias extranjeras; una firme voluntad

de defender su soberanía, sus recursos y sus posibilidades; la búsqueda de soluciones dignas a sus problemas limítrofes, o de aliado para contrarrestar la presión que se ejerce sobre sus fronteras; el incremento del intercambio y una clara proyección de su expansión futura hacia el ámbito del Pacífico.

Desde el origen de su vida independiente, Chile tuvo visión de su rol en el Pacífico. Fue, también, Portales, quien le señaló una misión señera, al decir: "Debemos dominar en el Pacífico; ésta debe ser su máxima ahora, y ojalá fuera la de Chile para siempre".

El Partido Nacional ha comprendido cabalmente la necesidad de tal política. Y, para ello, ha fijado como tarea suya ineludible: "2.— Formular una política internacional, realista, activa y definida, que asegure la independencia, integridad y soberanía de Chile. Los anhelos de complementación económica iberoamericana no deben plantearse como ideales de vaga generosidad internacional, sino como un medio de ensanchar las posibilidades del país, lo que supone consolidar y acrecentar su capacidad de intercambio. Chile se abre al Pacífico y debe considerar con realismo su importante posición geográfica en esta área, dando especial atención a las vastas posibilidades que ella ofrece y al desarrollo de sus comunicaciones marítimas y aéreas".

Expansión hacia el ámbito del Pacífico, y complementación iberoamericana; eso son los dos hitos de la acción externa de Chile. Y ambos deben estar imbuidos de un hondo sentido nacionalista.

Desde que el representante de Chile en Caracas, primero, y más tarde en Río de Janeiro, don Jorge Prat, en 1954, planteó ideas concretas tendientes a abrir camino a un sistema económico nuevo en América, fundado en la coordinación de las naciones iberoamericanas y en la cooperación internacional para su financiamiento, y presentó el proyecto chileno del Banco Interamericano de Desarrollo, hecho realidad en el breve lapso de pocos años, estos países han seguido dando pasos con igual finalidad, pero con regular fortuna. Buenas iniciativas, de moderado éxito, han pasado luego a decaer notoriamente, como sucede con la ALALC, y, por otras razones, con la Alianza para el Progreso.

Producido el movimiento inicial, todo indicaba que debía ir aumentando su velocidad. Pero, en verdad, se ha carecido de ideas concretas y realistas, se ha caído más en seguir el curso de las

ilusiones, que en perfeccionar los organismos adecuados para avanzar en etapas sucesivas.

Y, mirado desde el punto de vista chileno, se ha perdido el punto de vista esencial: considerar las posibilidades del país.

Este hecho implica otra de las consecuencias graves de las ideologías internacionalistas, que siguen el curso de su propio pensamiento, se autoabastecen en sus mismas ilusiones, y no miran que la realidad tiene otro cariz, ni a veces, lo que es más grave, que Chile tiene otros intereses.

De ahí que, para este rápido esbozo, sea necesario reiterar que los conceptos de nacionalidad y de soberanía, siguen siendo los elementos en torno de los cuales debe formularse una política externa chilena.

Imponer la autoridad.—

La segunda misión que tiene el movimiento rectificador, es restablecer la autoridad.

La autoridad, el principio mismo de autoridad, ha sufrido más que ningún otro, los efectos de la obra destructora y desquiciadora de la política partidista, de los demoledores profesionales, y de la blandura de quienes debieron sostenerla.

El Partido Nacional se impone la tarea de restablecer en plenitud el principio de autoridad en Chile. No sólo en la política, sino en la vida pública. También en las universidades, en las escuelas, donde son más responsables los que no saben imponerla y hacerla respetar, que aquellos que la vejan; y en todos los planos de la vida nacional, estableciendo el acatamiento a la autoridad de la ley y del Derecho.

Piedra angular de la construcción del Estado Chileno, principio ordenador del mismo, es el de autoridad. En torno a él se construyó la república.

La existencia de una autoridad firme y sin vacilaciones, permitió a Chile encauzar energía suficiente en tareas constructivas, y le permitió forjar una Nación y hacer historia, ejemplares.

La autoridad política en Chile, por su tradición y por la idiosincrasia de su pueblo, debe recaer íntegramente en el Presidente de la República. Pero esta autoridad es un atributo impersonal, dado al cargo de Jefe del Estado y no a una persona física determinada. Y, por lo mismo que es una autoridad impersonal, exige que

se la ejerza conforme a su integral sentido, y no conforme a las particulares afinidades o antipatías del mandatario.

La autoridad del Presidente de la República, en consecuencia, es una función de Gobierno. Desaparece el hombre que ocupa el cargo, con sus pasiones, su ideología, su partidismo, sus intereses personales o los de sus amigos. Y aparece esa entidad abstracta que, cuando son grandes y naciones quienes la encabezan. concita el respeto, la unidad nacional, el sentimiento y el apoyo popular; esa entidad es "el gobierno".

En los sesenta años que duró sin alteraciones la tradición portaliana, esta entidad abstracta del Gobierno, surgió del mismo foco creador del alma nacional, e identificada con ésta, mantuvo fielmente sus características esenciales. Tuvo, como señala don Francisco Encina, un acentuado carácter religioso. Fue una fe y un culto laico, cuyos mandamientos fundamentales eran el patriotismo, el sentido nacional la abnegación cívica, la honradez, la justicia, el orden, el respeto inflexible a las leyes, y la seriedad y la decencia en todos los actos públicos y privados.

Después de 1891, destruida la autoridad del Presidente de la República, poco a poco se han ido perdiendo uno y otro de aquellos valores. Pero, en forma total, se perdió ese carácter abstracto y casi religioso.

El Gobierno pasó a ser expresión de la política partidista. El Gobierno, eran los fulanos o los menganos, con sus apetitos, sus intereses, sus paniaguados, sus clientelas electorales. El Gobierno pasó a ser los partidos políticos de turno en el poder. Perdió entidad, perdió tradición, perdió sentido nacional, perdió respeto, perdió ejemplaridad. Perdió, por tanto, autoridad.

El Partido Nacional lucha por restablecer la autoridad, comenzando por darla a la jefatura de la Nación, dotándola de las más amplias facultades, pero, exigiéndole los más duros requisitos:

Sentido nacional, esto es, rechazo del partidismo y del ideologismo en el Jefe del Estado; renuncia de los intereses propios y superación de todo interés que no sea el de la nación toda.

Impersonalidad, esto es, comprensión de que la autoridad es atributo del cargo en sí mismo, y no atributo físico del personero; y, en consecuencia, debe ejercerce para los fines propios de la nación, no para satisfacer los anhelos político partidistas, vanida-

des ni ambiciones, personales o los de su grupo, su partido su secta.

Ejemplaridad moral, esto es, justificación de la autoridad por su ejercicio; por la rectitud de sus actos, por el desinterés con que se ejerce. Lo que debe alcanzar tanto al Jefe del Estado, como a los que dependen de su confianza y de su jerarquía.

Restablecer el estado de derecho.

La tercera misión que reclama para sí el Partido Nacional, es restablecer plenamente el Estado de Derecho, el respeto a la ley, al sentido general y normativo de la ley.

Como se ha dicho, anteriormente, en Chile se ha roto el ordenamiento jurídico, la ley ha perdido sus requisitos esenciales, dejando de ser general, y la legislación no guarda la necesaria armonía ni correlación.

El chileno de hoy, no está amparado por la ley frente al Estado que lo aplasta y el funcionario que lo persigue o que le impide la libertad de decidir sus propios actos. E incluso, cuando la ley lo ampara, el funcionario lo presiona y lo hostiliza para que no recurra a los medios que la ley señala para su defensa, y lo fuerza a aceptar soluciones ilegales. ¡Qué otra cosa es lo que hacen, constantemente, los funcionarios del Indap o de la CORA, y aún Intendentes y Gobernadores, con los agricultores!

Es que en Chile, tanto se ha abusado de la ley, a tal punto se la ha desposeído de toda ciencia, de toda lógica jurídica, que ha perdido su eficacia. Y junto a ella, ha perdido su respeto. Ya nadie le tiene respeto. El funcionario, porque es el primero que la atropella. El ciudadano, porque no impone su derecho a someterse a la disposición legal. La autoridad estatal, porque admite que la presión sea arma de reemplazo de la norma legal, sea que la presión la ejerza un grupo gremial o político, sea que la ejerzan los funcionarios de Gobierno.

Los legisladores han creído que la ley puede tener cualquier sentido, decir lo que se les antoja, siempre que en su trámite y dictación se respeten las disposiciones constitucionales y reglamentarias establecidas. Pero no han reparado que con tal criterio lo que se ha obtenido es romper todo el ordenamiento jurídico. Ser, incluso, una ley contradictoria con otra; y, permanentemente, ser tan injustas, que unas leyes dan a unos pocos, lo que otras leyes nic-

gan a los restantes. Basta pensar en las inmensas diferencias que contienen las leyes de previsión social existentes, para eliminar toda discusión al respecto.

Han desconocido así, que la ley debe encuadrar y concordar con principios jurídicos fundamentales; con un ordenamiento, más que expreso y formal, que permita crear en el pueblo una conciencia de los bienes jurídicos protegidos, como que son valores reales y no meros caprichos legislativos.

El Partido Nacional, en su labor rectificadora, acepta la tarea de restablecer el imperio de la ley y el estado de Derecho. Luchar por crear un orden basado en principios jurídicos, que permita crear instituciones estables y sólidas para el Estado, dotarlo de facultades suficientes para la ejecución eficaz de sus funciones propias y de las que el país requiera con urgencia, pero limitando drásticamente todo lo que se transforme en abuso de poder y en presión ilícita sobre el ciudadano; y, en el plano privado, un orden que permita al hombre la plena libertad y el desarrollo de sus posibilidades, que resguarde los derechos de los débiles frente a los más fuertes, y los derechos de todos los habitantes de Chile, frente a todo atropello gubernativo o funcionario.

La hermosa tradición chilena del respeto a la ley, lamentablemente destruída en la práctica por la demagogia, la incapacidad y la inconciencia de legisladores sin comprensión de sus funciones, habrá de volver a reafirmarse, para permitir la labor de reconstruir una gran nación.

Una política moderna y realista.—

El país ha vivido estos cuatro últimos años, la culminación del proceso del "ilusionismo". Ha vivido el contraste rudo que tiene la confrontación con la realidad, de las teorías y programas montados por ideólogos partidistas. Ha vivido la partida inicial de tales teorías, aparentemente exitosas por el respaldo amplísimo dado a un gobierno recién elegido y ayudado por recursos financieros inmensamente superiores a los que tuvieran los gobiernos anteriores. Ha vivido el período de duda, de vacilación y de freno, en el que la realidad mostró su firme consistencia. Y está viviendo, con su paciencia ya agotada, el comienzo de la crisis total del ilusionismo.

A este ilusionismo demócratacristiano, le sobró poder mágico

para conquistar votos, con su dominio de recursos de convicción y sugestión, pero le faltó sentido chileno y sensatez, para considerar primordialmente la realidad de Chile.

Tal vez su ideologismo extranjerizante, su teoricismo vago y verbalista, su odio a todo lo existente antes que "ellos", y su increíble anhelo de negarlo todo y partir de cero, los haya cegado al punto de negar incluso la realidad.

Pero la realidad misma de los hechos, silenciosos pero concretos, fáciles de negar con palabras, pero resistentes y porfiados, con macisez propia, una vez más se ha impuesto sobre las teorías y las ideologías. Los ilusionistas, cada vez más atormentados, son ya los únicos que se siguen auto-engañando, pero con los ojos muy cerrados, pues también presienten el desastre.

Esta posición falsa en unos, inmadura en otros, francamente demagógica, en los más, es la reiteración de procesos psicológicos ya conocidos en la historia de Chile. Tienen características similares al ideologismo dominante en la política chilena por los años siguientes a la Independencia, que también quiso ignorar todo lo construído en tres siglos de colonia, partir de cero con sus ideas teóricas, formuladas en Europa, y quiso negar la raíz misma de su sangre, su estirpe y su tradición.

Es la manía de renovarlo todo, que lleva a improvisar planes de reforma, buenos o malos, pero siempre "reformistas", para no perder ese prestigio.

El resultado también es conocido. Provocó igualmente el caos, la anarquía, la ruina, la inseguridad, la pérdida de los valores creadores de una Nación. El país pareció no tener otro destino que el muy triste que vivían prácticamente todos los países iberoamericanos, en que los ideólogos declinaban las doctrinas jacobinas, mientras en las calles se asesinaba la gente. En el pequeño Santiago de 1828, con su reducida población, sólo en un año se asesinaron 600 personas. En los campos, bandas depredadoras destruían la gran fuente de riqueza para la Patria naciente.

Pero, entonces, el país tuvo una reacción. Contó con un hombre que supo concebir una Nación, un Estado nacional, estructurado no sobre teorías, sino sobre su propia realidad, sobre el ser chileno, con sus calidades, aptitudes y defectos. Una concepción que recogía lo mejor de lo que tres siglos de heroica creación patria, habían dejado impreso en la raza: autoridad, disciplina, ímpetu, sentido de la jerarquía. Y Portales pudo crear verdaderamente Chile;

estructuró el Estado, le dió alma nacional, responsabilidad histórica, visión de destino. Puso fin a los "ilusionismos" al desorden, al caos, a la anarquía.

La historia, por suerte para este Chile de hoy, con tanta frecuencia se repite.

El Partido Nacional está resuelto a impulsar una política moderna. Y la primera condición de una política moderna es ser realista. Y su primera prohibición es servir una ideología y un partidismo.

Por realista, la política tiene que utilizar al máximo todas las posibilidades que le ofrece el país, todos los recursos, y los elementos técnicos, científicos, económicos y sociológicos que se han venido produciendo en el mundo, cualquiera que sea su origen, siempre que sirvan al interés nacional.

Así, mientras la política interna obedezca a un estilo chileno e imponga el principio de autoridad, la política externa será firmemente nacionalista. Y mientras la economía utilice los beneficios de la planificación superior, liberalice los mecanismos de la producción, impulse la iniciativa personal, y concrete la función del Estado a los fines propios, a la planificación y a los estímulos de la actividad privada, y a la ejecución de las obras y dirección de empresas que ésta no pueda realizar, en el plano social, en la protección del trabajador y en la seguridad social, se impondrán los mecanismos más socialistas, los que establezcan mejor la defensa de los derechos de aquellos a una remuneración la más alta posible y a un futuro cierto, que cubra su salud, los estados de necesidad y las exigencias de una vida familiar digna y civilizada.

Una política moderna, que respete la trascendencia y la funcionalidad de los organismos naturales de la nación; que los integre en la vida pública y en la responsabilidad del Estado, poniendo término definitivo al divorcio entre el país real y el país político, y al monopolio de la politiquería en la dirección de Chile.

Una política moderna, que no pierda esfuerzos, que utilice los recursos adecuadamente y que tenga conciencia de que lo que importa no es lo que se gasta sino el resultado que se obtiene. Que impulse una educación formadora de hombres de trabajo, chilenos de corazón, unidos al imperativo de crear el destino patrio y de servirlo. Que defienda la cultura y los valores del espíritu, la decencia y el respeto.

En fin, una política que sirva a lo mejor del hombre, a su

R-29154 1968
10(N84-60) AAH3467
C2

familia, a su trabajo, a su gremio, a su comuna, a su región, a la Patria toda. Afincada en la realidad, inteligente en su concepción, patriótica en sus fines y propósitos.

Esa es la política nacional.

Un gobierno para Chile.

Para realizarla, para fijarla como norma de las actividades nacionales, para sostenerla sin desmayos y sin desviaciones, se requiere restablecer el Gobierno nacional.

Ya se han dicho sus características, y señalado su sentido. Y el pueblo ya conoce dentro de sí mismo, quién puede encarnarlo y dirigirlo. Falta ahora establecerlo.

Falta enfrentar el desafío y crear el Gobierno nacional. Llevar allí al hombre que encarne la tradición chilena, que tenga la ejemplaridad que configura autoridad moral, la independencia que da confianza pública, la capacidad estadista que impulsa el esfuerzo individual, el desinterés personal que compromete la adhesión y moraliza con el ejemplo. Falta hacer realidad el movimiento rectificador, amplio y apartidista, chileno de raíz, de corazón y de mente, que el Partido Nacional está creando. Falta que en todos la Patria sea algo más que una palabra, que un sentimiento, que una nacionalidad. Que sea, más que todo, un imperativo que debe vivirse, crearse y servir, constantemente.

A todos los hombres de trabajo que construyen Patria, a todas las mujeres que la sostienen, a todos los jóvenes que deben darle futuro, el Partido Nacional les ofrece esta tarea.

Cada chileno tiene en ella su puesto. ¡Esta es la hora de ocuparlo! ¡Es la hora de asumir la tarea!

¡Esta es la hora, verdadera y definida, de restablecer la chilenidad!

Mario Arnello

Noviembre de 1968.

BIBLIOTECA NACIONAL
SECC. REFERENCIA, ARCHIVO Y BIBLIOGRAFIA
- 7 MAR. 1990
Ca. I D. X Co. I